

PROYECTO DE LEY INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO

Boletín N° 11632 – 15

La LGT (1982) ha permitido el desarrollo de la industria, otorgando certeza jurídica a los operadores quienes han desplegado redes fijas y móviles en todo el país, e introducido las más modernas tecnologías. Hoy, sin ley que declare Internet como servicio público un 70% de los hogares cuenta con acceso a Internet fijo, y de ellos el 70% una fibra óptica. Chile destaca entre los tres países del mundo con mayor velocidad de internet. Las redes móviles dan cobertura a más del 98% del territorio poblacional, y el 98% de las conexiones móviles ocurren en la red 4G.

Respecto del PdL aprobado en la Honorable Cámara de Diputada/os:

- Art.2 literal c) Con relación a que “el permisionario de este tipo de servicios sea una comunidad de telecomunicaciones”

El texto del Senado es más adecuado. Establece que quienes quieran proveer servicios a usuarios finales deben constituirse en la figura de una “comunidad de usuarios de telecomunicaciones”, cumpliendo con los requisitos que se establezcan un Reglamento de Subtel. Una junta de vecinos, o grupo de habitantes de una zona, o los mismos afiliados a una cooperativa o un APR podrían proveer el servicio constituyéndose en una “comunidad de usuarios”. Para extender la cobertura de servicios en aquellos puntos en que no llega la oferta de los operadores, las comunidades de telecomunicaciones ya previstas en la ley para dar servicios de telefonía han mostrado ser exitosas. Esta opción permite que otras organizaciones comunitarias se organicen según establezca el reglamento y ofrezcan con permanencia en el tiempo Internet a sus usuarios finales, organizadas con tal propósito.

En el texto aprobado en la Cámara se suma otros actores sociales que ya están cubiertos bajo el texto del Senado (juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones). Adicionalmente, agrega que municipalidades, gobiernos regionales o entes públicos de promoción o fomento al desarrollo local o comunitario u otras organizaciones sin fines de lucro podrán proveer el servicio a usuarios finales. Esta segunda parte es compleja y podría tener vicios de constitucionalidad autorizando la creación de empresas públicas de internet. Por otro lado, estas entidades administran bienes fiscales y nacionales de uso público, los que no pueden ser absorbidos por dichos entes sino que deben facilitarse como lo proponía el art. 18 y 19 del proyecto del Senado, a los operadores privados que hacen despliegue de redes. Esto infringiría aspectos de libre competencia. Esto no ocurre en otros sectores, ni en servicios básicos de agua o energía. Adicionalmente, los actores públicos carecen de la experiencia, escala y recursos para proveer Internet y mantener en el tiempo la infraestructura requerida para la provisión del servicio.

Por otro lado, el texto de la Cámara permite que todo este conjunto de actores (incluyendo las empresas públicas) actúen como permisionarios y no como concesionarios ante Subtel. Esto establece cargas regulatorias diferenciadas y deja a usuario con protección disminuida ante al permisionario (velocidad garantizada, calidad de servicio, fiscalización, etc.).

Si la opción es crear empresas públicas locales, están deben tener la misma carga regulatoria, competir con otros operadores (incluyendo los privados) en igualdad de condiciones, incluyendo la posibilidad de usar los bienes nacionales y fiscales.

- Art. 24B. Áreas de concesión. Es necesario equilibrar las exigencias de provisión de servicio de los operadores respecto del área obligatoria y de las opciones tecnológicas. La obligación de

conectar no puede estar definida con una tecnología específica, pues existen factores técnicos y económicos que no hacen factible a los operadores proveer con una determinada tecnología el servicio en todo el territorio. La neutralidad tecnológica aquí aplica en el sentido de que la compañía define la mejor tecnología para proveer la cobertura.

En este sentido el texto de la Cámara es más razonable, a pesar de ser muy exigentes. La exigencia del Senado simplemente es inviable, y lo que logrará es que los operadores NO soliciten áreas de concesión en ciertas zonas. La exigencia del Senado desincentiva la inversión pues obliga a soluciones técnica y/o económicamente no factibles.

Debe considerarse que en las zonas rurales se presenta un importante desafío doble, por la exigencia de la geografía, y por la baja densidad poblacional. Un 76% de las entidades (el equivalente a manzanas en zonas rurales) tiene menos de 30 hogares. Un 11% de las entidades a nivel nacional no registran hogares. Habitualmente se da una estrecha relación entre las entidades más pequeñas y la distancia de éstas a las capitales comunales o los centros de mayor densidad poblacional. Se suman por ende al poco atractivo comercial la dificultad y costo asociado al despliegue de las redes fijas de banda ancha.

- Art. 24C. Plazo para la provisión del servicio. Los plazos contemplados en el proyecto de la Cámara dan cuenta de las dificultades para el despliegue que enfrentan los operadores. En áreas en las cuales existe red el plazo de 6 meses es desafiante, pero abordable. En muchos casos los permisos y/o autorizaciones requeridas ante el regulador u otros organismos del Estado exceden por largo los 6 meses que se señalan.

Pero en los casos donde no existe red y se requiere un despliegue completo, el texto de la Cámara señala 12 meses desde la obtención de los permisos / autorizaciones. Esto reconoce los largos plazos de tramitación que enfrentan los operadores. Resueltos los permisos y autorizaciones, el plazo de 12 meses refleja los desafíos que imponen las condiciones geográficas donde deben desplegarse obras civiles, provisión de energía, etc. Algunas zonas solo pueden trabajarse en determinadas épocas del año por razones climática. En estos casos un período de 6 meses prorrogables por 1 vez como señala en el texto del Senado no reconoce las barreras que enfrentan los operadores para desplegar sus redes en el Estado y en el territorio.

Por otro lado, cabe destacar lo ha hecho la Comisión Nacional de Productividad que es una necesidad urgente armonizar, simplificar y agilizar los trámites requeridos para el despliegue.

- Art 28. Ámbito de acción del FDT. Existe un grupo de hogares que no pueden asumir el pago de una cuenta mensual de Internet. Como en el agua, la energía y otros servicios básicos, su universalización demanda del apoyo Estatal en ciertos casos. Esta incapacidad de pago explica la mayoría de las llamadas zonas rojas en áreas urbanas, donde a pesar de la existencia de redes, un porcentaje importante de los hogares sigue sin conexión, especialmente por no tener capacidad de pago para el servicio o los dispositivos necesarios.

La posibilidad de contar con un subsidio a la demanda focalizado en los hogares más vulnerables es una medida fundamental para el cierre de la brecha de acceso, equipara el set de instrumentos de Subtel al de otras entidades que buscan universalizar un servicio, y

converge a instrumentos similares en países como España, Canadá o Estados Unidos donde operan subsidios a la demanda de internet.

- Art 18 y 19. Parte de las barreras que enfrentan los operadores para el despliegue de infraestructura fija y móvil es el acceso al territorio. El texto aprobado por el Senado que se eliminó en la Cámara constituía un avance para lograr robustecer la conectividad. Reponerlo va en línea con el objetivo de incrementar la cobertura de Internet.
- Art 24 bis. Modificación a los servicios intermedios. El texto aprobado en la Cámara genera dos efectos muy relevantes: elimina la larga distancia internacional (LDI) y pone fin a la competencia de redes en la industria.

Al eliminar la LDI se genera un vacío normativo en la forma en la que continuará operando el régimen multiportador. Aun cuando han disminuido los clientes que hacen uso de este servicio, aun existen. Eliminar el régimen multiportador limita la capacidad de elección de los clientes, que hoy pueden escoger entre más de 20 empresas portadoras. El régimen multiportador se generó a partir de la resolución N°389 (17.04.1993) de la Comisión Resolutiva (antecesora del TDLC) como un instrumento pro competencia. La supresión del sistema multiportador debe consultarse con la Fiscalía Nacional Económica por potenciales efectos sobre la competencia.

Con relación al texto apruebo en la Cámara “El concesionario de servicio público deberá ofrecer, dar y proporcionar a todo concesionario de servicios intermedios igual clase de accesos o conexiones a su red respecto de la calidad, extensión, plazo, valor o cualquier otra característica de los servicios que les preste con motivo o en razón del acceso o uso.”. *“Las tarifas que podrá cobrar el concesionario de servicio público telefónico a los concesionarios de servicios intermedios deberán ser aprobadas o fijadas por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Turismo siempre que concurra la calificación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia prevista en el inciso segundo del artículo 29 de esta ley.”*, este permite a los operadores de servicios intermedios, acceder a proveer servicios a usuarios finales utilizando las redes de los operadores de servicio público. Esto implica un cambio profundo en la industria, pues modifica la estructura del mercado y las condiciones de competencia, eliminando la competencia de redes. Genera la desagregación total de redes a tarifas reguladas en mercados hoy no regulados. Dicha medida desincentiva la inversión toda vez que los operadores ven reducidos los incentivos para expandir sus redes, mientras que los operadores intermedios podrán usar redes existentes sin tener incentivos para incrementar la capilaridad de las redes. Este efecto es el contrario al que busca el PL.

Si la redacción final es un error, debe corregirse dejando claro que la intención es garantizar el acceso a los operadores de servicio público a las redes de los operadores de servicios intermedios (el texto actual dice lo contrario). Considerando que los proyectos del FDT para el despliegue de redes troncales (FON, FOA, FOT) se ha indicado que tienen entre sus objetivos incrementar la cobertura de redes de banda ancha y la resiliencia de las redes, esta última interpretación, es decir de redes de servicios intermedios abiertas es la que debe primar.

- Art 26 ter. El texto aprobado en la Cámara introduce la obligación para los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones quienes “... *deberán habilitar un acceso web, con*

perfil de usuario para lectura y exportación, que permita a la Subsecretaría el acceso a información contenida en sus centros de control y monitoreo de redes en tiempo real...”

Esta medida presenta riesgos importantes, y genera preocupación en la industria y las asociaciones de protección de datos personales. El acceso irrestricto no responde a consideraciones de proporcionalidad ni de finalidad, y permite el acceso y exportación de datos personales y potencial información sensible de los usuarios. En los centros de control se conectan diferentes plataformas de los operadores, incluyendo aquellas que contienen información de los clientes (datos personales, todo su tráfico en la red, información de pago, etc.). Sin especificar el fin buscado, y la información requerida se podrá acceder, visualizar y exportar toda la información de clientes y su tráfico. Esto viola la protección constitucional de datos personales. Es importante destacar que el acceso a esta información hoy requiere autorización judicial, y que los centros de control son centros de gestión no de fiscalización.

Dicho acceso implica además un riesgo de ciberseguridad para las compañías, pues un enlace a los centros de control genera vulnerabilidades existiendo la posibilidad de ser fuente de propagación de incidentes de ciberataque que comprometan la operación y continuidad de las empresas.

Subtel, como regulador sectorial, ya tiene acceso a reportes sobre alarmas de detección y resolución de fallas con mínimos riesgos de seguridad y sin arriesgar datos de los usuarios. El comportamiento de las redes en las últimas emergencias – incendios e inundaciones – son indicativos de la adecuada gestión de los operadores de éstas, y no se han conocido necesidades de fiscalización en tiempo real.

Adicionalmente, el art 31 bis incluye la obligatoriedad de entregar información financiera y comercial de las compañías, sin restricciones y sin un objetivo claro. En esto se incluye información estratégica de las empresas existiendo observaciones en cuanto a su finalidad y proporcionalidad.

- Art 31 bis. Régimen sancionatorio. Texto aprobado en la Cámara incrementa en cinco veces los montos máximos de las sanciones a las que están afectos los operadores de servicios públicos. Esto sin embargo no va asociado a una definición de gradualidad de las sanciones en base a la gravedad de la falta, generando incertidumbre y una potencial discrecionalidad en su aplicación. Debe establecerse un catálogo de infracciones con la tipología, gravedad, y criterios para aplicar la sanción por reincidencia. La normativa de otros sectores establece gradualidad, lo cual genera un escenario de mayor certeza jurídica.
- Art 36B. Texto aprobado en la Cámara incorpora el literal f) que establece sanciones para “f) El que maliciosamente destruya, dañe o inutilice la infraestructura de telecomunicaciones interrumpiendo su servicio sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

Este texto debe mantenerse. En los últimos años se observa un incremento sostenido en los actos de vandalismo y robo que afectan a las redes fijas y móviles. Si pudiera ser modificado este artículo, mejoraría su aplicación si además crea un delito específico en la receptación de especies y partes de las redes, y lo sanciona acorde.

LA CRISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL QUE DEVELÓ LA TRAGEDIA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

La élite política en las últimas semanas ha estado enfrascada en debatir sobre lo ocurrido en septiembre de 1973 mientras la ciudadanía sigue sufriendo la debilidad del Estado al no cumplir adecuadamente su rol en la protección de las personas, familias y comunidades - como por ejemplo el aumento de homicidios en las últimas semanas, además se conoce el lapidario informe de la Contraloría sobre el caso Fundaciones y Seremia Antofagasta y se revela que hay 12 personas pagadas por estas Fundaciones cumpliendo funciones públicas en la Seremi y en el MINVU o la tragedia en San Pedro de la Paz donde mueren 7 personas por imprudencia en un choque entre Biotren y una micro del Transporte público regional-.

Este último episodio es muy grave ya que el atraso del transporte público regional viene denunciándose hace años producto del contraste que se está viviendo con el transporte público en la Región Metropolitana donde se definen nuevas líneas de Metro, aparecen nuevos buses eléctricos y la red Metro/Red se expande a Vallegrande y otras zonas producto de la expansión mobiliaria en el Gran Santiago mientras que en regiones no hay coordinación entre red ferroviaria y transporte público, no hay seguridad en los paraderos ni en los pasos intermedios y en otras ciudades el transporte público mayor y menor es anticuado, inseguro y contaminante.

¿Por qué está pasando esto, si desde que se creó el subsidio al Transantiago existe la ley espejo nº20.378 que estableció que 1 peso para Transantiago hay 1 peso para regiones donde señala que son recursos “para el transporte, la conectividad y el desarrollo regional”?

Desde 2009 que estos recursos llegan a las regiones, pero lamentablemente NO se destinan a proyectos de modernización del Transporte Público regional, al contrario porque la ley lo permite, se destinan a proyectos de “desarrollo regional” y el transporte público en regiones se ha convertido entonces en “un pariente pobre” -como lo vimos este fin de semana- con infraestructura vial precaria, buses antiguos, choferes estresados y por tanto, con ciudadanos que viajan en transporte público con un alto nivel de inseguridad.

Lamentablemente el espejo que creó la ley 20.378 para las regiones NO se ha usado en mejorar el transporte público regional (solo un 10% del Espejo o FAR se usa en proyectos para el Transporte Público regional de acuerdo a un estudio MTT) lo que no generó ninguna

reacción de los distintos Ministros de Transporte de los últimos años para cambiar esta anomalía.

Hay aquí una falencia grave de las autoridades democráticas sectoriales que no han colocado el foco en lograr que esos recursos se destinen a modernizar el transporte público mayor y menor en las diversas regiones.

El año pasado se reactivó este debate legislativo porque el Subsidio debe renovarse y para 2023 se hizo vía ley de presupuesto; pero ya hace meses que en el Senado está paralizada la tramitación de estas indicaciones y por ende no se han debatido las indicaciones de las senadoras Ximena Ordenes y Yasna Provoste "que proponen que "a lo menos el 50% del subsidio espejo se destine obligatoriamente al desarrollo del transporte público mayor y menor regional", asimismo se propone que cada región tenga un Directorio del Transporte Público Regional que coordine los esfuerzos de los distintos tipos de transporte.

Preocupantemente en las últimas semanas el Ministerio de Hacienda ha señalado su interés de terminar con este "espejo para las regiones" y también con el Fondo FAR en el marco de su proyecto "regiones más fuertes", altamente cuestionado por las situaciones de corrupción de los GORES y que no refuerza los controles hacia esa instancia.

Estas señales han generado la inquietud parlamentaria y de expertos de que ven que este Ministerio de Transporte tampoco se preocupó de mejorar el transporte público regional, ni menos de modificar la ley 20.378 para que la mayoría de esos recursos se destinen a planes de modernización del transporte público mayor y menor según sea la realidad regional.

Esta tragedia del transporte público en San Pedro de la Paz nos debiera motivar a generar un amplio consenso transversal de la importancia y urgencia de que las regiones tengan mejor transporte público, que no se elimine el Espejo del subsidio al Transantiago y que se reactive en la Comisión de Transporte del Senado el proyecto de ley que renueva el subsidio al transporte público regional y se establezca que el 50% de esos recursos se destinen a desarrollar nuevos proyectos de inversión que asegure tener un tener un transporte público de calidad también en las regiones.

Si los gobiernos no resuelven estos problemas básicos se empieza a debilitar la Democracia, ya que estamos ante una ciudadanía que exige soluciones y mejor gestión y no puros discursos.

Ojalá se haya aprendido de esta nueva tragedia en el transporte público en regiones.

LOS DESAFÍOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 2024: MAYOR PROBIIDAD, APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MÁS SEGURIDAD, MEJOR EDUCACIÓN PÚBLICA E INICIAL

Los desafíos de la ley de presupuestos 2024 son diversos. Es clave que este nuevo presupuesto asegure un buen uso de los recursos públicos fortaleciendo la transparencia y la concursabilidad; pero también el Presupuesto 2024 debe apuntar a la Reactivación Económica fortaleciendo la inversión pública, el apoyo a la diversificación productiva fomentando nuevas industrias como litio, hidrógeno verde, la seguridad alimentaria para que tengamos un ciclo de crecimiento de la economía; un potente Plan de Recuperación Educativa y más recursos para fortalecer los planes locales de Seguridad Ciudadana.

Pero también debe tener un foco en la adecuada implementación en las regiones y en las comunas de estos y otros programas sociales ya que en octubre 2024 habrán elecciones regionales y municipales y se requiere que las políticas públicas se hayan desplegado adecuadamente en la realidad local.

Por ejemplo, en atender a los afectados de las antiguas y nuevas inundaciones ocurridas en la zona Centro Sur hace algunas semanas o en tener un subsidio focalizado en las familias vulnerables para amortiguar las alzas tarifarias de electricidad que subirán ahora 8% en clientes con consumo menor a 350 kwh y en 48% para pymes e instituciones que tienen consumos superiores a 500 kwh o en destinar recursos para disminuir las listas de espera en los servicios de salud.

Estos desafíos país deben ser transversales, requieren acuerdos de todos los sectores políticos. Por eso, para el presupuesto 2024 proponemos que este apunte prioritariamente a los siguientes ejes:

- Mayor concursabilidad, más transparencia y mejor ejecución de los recursos públicos

- Más inversión pública y apoyo a nuevas industrias emergentes que permitan reiniciar una senda de crecimiento de la economía desde 2024
- Financiar un Plan de Recuperación Educativa, especialmente en la educación pública e inicial
- Más recursos para fortalecer los Planes Locales de Seguridad Ciudadana en las 150 comunas con mayores tasas de homicidio, robos y tráfico de drogas.
- Empezar a resolver los dramas del transporte público regional (develados en tragedia San Pedro de la Paz) buscando que en período 2024-2026 se impulse una mayor inversión regional en Transporte Público vía FAR/espejo
- Atender con prontitud a los afectados de las recientes inundaciones, subsidio a familias vulnerables para amortiguar alza tarifaria en electricidad

i) Agenda de Reactivación económica y de empleos

La economía debe salir del estancamiento actual, se requiere recuperar la capacidad de crecimiento desde el año 2024; por eso, el presupuesto 2024 debe incrementar los montos de inversión pública que este año llegan a US\$ 13.700 millones y además, fomentar el desarrollo de alianzas público/privadas para aumentar la producción del litio, del hidrógeno verde y para fortalecer la producción de alimentos que nos permita avanzar en la seguridad alimentaria que permita empezar a aprovechar las oportunidades de Diversificación Productiva .

Debe existir claridad sobre los proyectos de inversión y transferencias de capital que se ejecutaran en 2024-2025, de tal manera que en los territorios exista claridad sobre el cronograma de implementación.

El presupuesto 2024 tiene que ser reactivador y apuntar a lograr que la economía el próximo año permita recuperar la capacidad de crecimiento de la economía, que además, se traduzca en creación de nuevos empleos formales y así combatir la alta informalidad laboral que ha crecido en el último año.

Un aspecto relevante para 2024 es lograr un mejor uso del Espejo que es el subsidio al transporte público en regiones para que se oriente a financiar un real plan de modernización del transporte público mayor y menor en las regiones, que incorpore más ciudades a sistemas regulados y que el transporte público menor vaya migrando a la electromovilidad. Este plan debe ser 2024-2026 y debe garantizarse que a lo menos 50% del espejo en regiones financie acciones que mejoren el transporte público regional.

ii) Agenda de Probidad

Las situaciones conocidas por la opinión pública en las últimas semanas, especialmente a nivel de GORES como MINVU, revela que una parte de los recursos públicos se asignan sin ninguna rigurosidad técnica, de manera directa sin concursabilidad, a Fundaciones que carecen de expertice entre otras anomalías.

Al respecto proponemos para disminuir las vulnerabilidades que han generado estas situaciones de corrupción, tanto en la ley de presupuestos 2024 las siguientes medidas:

- Es urgente fortalecer los controles externos a los GORES vía un programa gradual de fortalecimiento de las Contralorías Regionales, en los presupuestos 2024 -2026 con más profesionales que permitan una mayor fiscalización y control en las regiones.
- Que en el presupuesto 2024 exista un refuerzo normativo y de las capacidades institucionales de los auditores ministeriales (CAIG) que les permita jugar un adecuado rol preventivo.
- Modificar la ley orgánica sobre Administración y Gobierno Regional para que los proyectos de inversión de montos superiores a 1.000 UTM requieran la aprobación del Consejo Regional para el caso de las instituciones públicas y que toda asignación a privados debe pasar por aprobación de los CORES.

- Modificar el actual artículo 23 de la ley de presupuesto y ampliar la concursabilidad, la transparencia y las rendiciones cuentas tanto a las transferencias corrientes como también a las transferencias de capital.
- Que las asignaciones directas se identifiquen en la ley de presupuesto y glosas respectivas, por tanto deben votarse transparentemente por el Parlamento.
- Establecer que las instituciones privadas y ejecutoras de fondos públicos deben tener a lo menos 3 años de expertise institucional en el área.
- Modificar la regulación de las Corporaciones dependientes de los Gobiernos Regionales que están en la glosa 3.4 apuntando a evitar los conflictos de intereses actuales donde miembros de sus directorios son beneficiarios de las transferencias de recursos, establecer claras normas de transparencia activa para esas instituciones y limitar a 2% la asignación de recursos del FNDR, entre otros temas prioritarios.
- Incorporar una nueva glosa que limite a los GORES que el gasto del mes del diciembre no puede exceder del 20% de transferencias corrientes y de Capital del presupuesto anual, de tal manera de incentivar la planificación de la ejecución en el año y evitar lo ocurrido en 2022 donde hubo una asignación discrecional de recursos en este último mes.

iii) Plan de Recuperación Educativa

Chile y su futuro requieren recuperar su educación, especialmente revirtiendo sus bajos niveles de aprendizaje, aumentando la presencialidad escolar y combatiendo la violencia en la convivencia escolar.

El presupuesto 2024 debe tener Un Plan de Recuperación Educativa que apunte a recuperar la asistencia escolar, apoyo para tener mejores aprendizajes en matemáticas y lecto escritura, reinstalar una convivencia escolar sana, respetuosa y pacífica combatiendo el bullying y el acoso escolar.

iv) Apoyo a los planes locales de seguridad local

Muchas comunas ven como aumentan los homicidios, los robos, el tráfico de drogas y no existen políticas locales que permitan enfrentar estos episodios mediante una acción conjunta entre Municipios, Gobierno y organismos policiales.

Proponemos que se implemente un Plan 2024 en las 150 comunas con mayores tasas de violencia delictual.

v) Problemas sociales urgentes

Darle celeridad al apoyo a las familias afectadas por las sucesivas inundaciones como legislar un subsidio a las familias vulnerables que amortigue las alzas tarifarias en cuentas eléctricas.

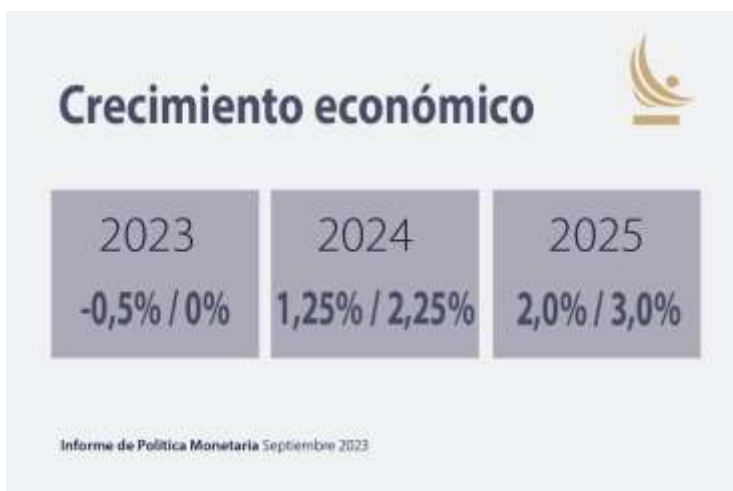
INFLACIÓN



La meta de inflación a diciembre 2023 (4,3%) se está alcanzando considerando que en enero 2023 la inflación anualizada llegaba a 12%.

Esto es una buena noticia para las familias de sectores populares y clases medias.

Pero los problemas siguen siendo el bajo crecimiento y la escasa capacidad de creación de empleos.



2023 tendrá un crecimiento negativo y el último IMACEC de 1,8% no es aún el inicio de la recuperación económica.

Para 2024 crecimiento llegaría a 1,25%-2,25%, pero eso es un monto insuficiente.

El país requiere una agenda de reactivación con foco en recuperar la capacidad de crecimiento económico por ejemplo incentivando la inversión pública y privada y también fomentando el desarrollo de nuevas industrias que diversifiquen nuestra matriz productiva impulsando la industria del Litio y el Hidrógeno verde, mediante alianzas público/privada que están en discurso gubernamental, pero no se concretan.

Otra dificultad está en el empleo.

La tasa de desempleo en 2013 tuvo un promedio anual de 6,1% y este 2023 el promedio de la tasa de desempleo es 8,5%.

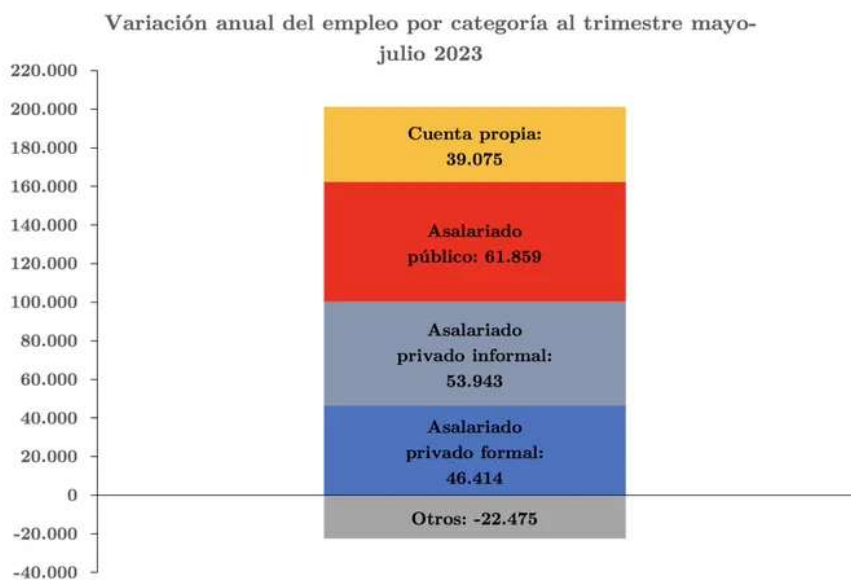
Por tanto, el desafío es desarrollar nuevas actividades productivas que generen nuevos empleos y ahí está nuestra principal debilidad porque lo que ha crecido el último año es el empleo público, el empleo informal y después vienen los empleos privados.

Adicionalmente, el mercado del trabajo está viviendo un fuerte proceso de tecnologización que está significando cambios laborales importantes como la polifuncionalidad; se legislo para una rebaja gradual de la jornada laboral a 40 horas y además está creciendo el empleo informal al 27%.

Esta es una materia que requiere adecuados análisis, ajustes a las nuevas realidades y un permanente monitoreo de lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo.

El país requiere un acuerdo transversal para impulsar nuevas actividades productivas como el litio, el hidrógeno verde, la industria alimentaria, las pymes turísticas, pero eso ve difícil

Esa lógica política polarizante no ayuda al desarrollo y crecimiento del país. Se requieren cambios en nuestra cultura política que debiéramos abordar.



Fuente: Elaborado en base a Encuesta Nacional de Empleo del INE

SEMINARIO COMISIONES UNIDAS
Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y Minería y Energía
Universidad de Santiago de Chile
Ex Congreso Nacional
Santiago 28 de septiembre 2023

Presentación “Informe Reforma Integral a la Distribución Eléctrica”.

I. Programa

11,00 a 11,20 horas	Palabras inaugurales, Senadora Luz Ebensperger, Pdta. Comisión de Minería y Energía y Senadora Ximena Rincón, Pdta. Comisión Desafíos del Futuro
11,20 a 11,40 horas	Presentación del Informe sobre Reforma a Distribución Eléctrica, coordinador del equipo de expertos Profesor Humberto Verdejo (USACH)
11:40 a 12,40 horas	Panel de análisis del Informe: Presidente Asociación de Empresas Eléctricas, Víctor Tavera Directora Ejecutiva ACERA, Ana Lía Rojas Gerente FENACOPEL, Patricio Molina Rodrigo Moreno , Académico U de Chile y del Imperial College London Presidenta Chile Sustentable, Sara Larraín
12,40 a 13,00 hrs	Comentarios de los participantes
13,00 – 13,15 horas	Palabras al cierre del Ministro de Energía Diego Pardow

INVITACIÓN

Las Comisiones de Minería y Energía y de Desafíos del Futuro le invitan a un Taller Seminario para presentar el Informe sobre “Reforma Integral a la Distribución Eléctrica” que fue encargado por ambas Comisiones a un conjunto de expertos del sector eléctrico.

Esta actividad se realizará el jueves 28 de septiembre de 11,00 hrs a 13,00 hrs en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago en Morandé 411

Se ruega confirmar participación.....

11 DE SEPTIEMBRE: DÍAS TRISTES

Estos son días tristes para nuestra sociedad.

Son amargos para muchas familias chilenas que sufrieron la violación de los derechos humanos de algunos de sus seres queridos, o sufrieron la relegación, el exilio, otros que aún buscan a sus detenidos desaparecidos o que tuvieron que vivir 17 años bajo un sistema político que no respetaba las libertades ni los derechos básicos.

Son tristes porque se interrumpió violentamente la convivencia democrática, se persiguió por pensar distinto, se cerraron las instituciones democráticas y muchos tuvieron que refugiarse en las Iglesias o a emigrar a otros países democráticos que aprendieron del dolor de la dictadura, como lo refleja el discurso del Presidente de Francia Emanuel Macron recordando el coup d'état en Chile o la declaración del actual gobierno derechista de Italia defendiendo la vigencia de la democracia.

La tragedia del pueblo chileno, la Moneda bombardeada no paso indiferente en los países democráticos y en el continente.

Por eso muchos sectores esperábamos que al conmemorarse los 50 años de esos tristes momentos de nuestra historia patria íbamos a tener la capacidad como sociedad de decir que habíamos aprendido de estas lecciones de la historia y que podríamos -mirando al futuro- decir que siempre cuidaríamos nuestra democracia, que nunca más se recurriría a un Golpe de Estado, ni menos avalaríamos las violaciones a los

Derechos Humanos, ni jamás fomentaríamos la violencia política.

Se esperaba eso a partir del aprendizaje de que sin memoria no hay un mejor futuro como nos han enseñado sociedades como la alemana, la española, la francesa y otras.

Lamentablemente como sociedad pareciera que seguimos cometiendo los errores políticos de hace 50 años que culminaron con el trágico golpe de Estado. Es más, conociendo los horrores que se vivieron en los 17 años de dictadura, hay actores políticos -como los distintos partidos de derecha- que incluso pidieron leer la misma declaración de agosto del 73' que algunos usaron como fundamento del golpe de Estado.

Estamos repitiendo los mismos errores de aquella tragedia griega donde todos conocían el amargo desenlace y nadie hacía nada para evitarlo. Esto es un gran retroceso cultural como país, donde debemos constatar que el pasado nos divide.

Afortunadamente tuvimos a los ex Presidentes de la República (Frei, Lagos, Bachelet, Piñera) junto al Presidente Boric que asumieron su rol republicano y firmaron una declaración esperanzadora denominada "Por Siempre, Democracia" y hubo 15 diputados de la centro derecha y centroizquierda desde RN al PS que firmaron el Acuerdo **"Por la Democracia, los Derechos Humanos y por la No Violencia Política"** ; gestos políticos que van en la dirección de que hay una parte de líderes políticos actuales que asume la lección de reafirmar su compromiso por la democracia y los

derechos como lo pide la mayoría de los chilenos -95% demandan esto en encuesta CADEM-.

Pero desafortunadamente se mantiene una élite política polarizada, en especial en la UDI y en la ultraderecha donde persiste la defensa del golpe de Estado y de las violaciones a los DDHH.

Este fin de semana hemos visto a jóvenes encapuchados haciendo destrozos a la infraestructura pública y atacando a familiares de víctimas de derechos humanos.

Esta violencia política es tan grave como el bombardeo ocurrido hace 50 años al Palacio de la Moneda. Estos comportamientos no tienen cabida en democracia y ojalá que todos los sectores políticos condenen lo ocurrido hace 50 años como lo que se vio por televisión este fin de semana con estos grupos violentistas.

La violencia NO debe tener cabida en nuestra democracia, pero tampoco nuevos golpes de Estado, ni menos violaciones a los derechos humanos y siempre buscar métodos democráticos para resolver las diferencias que se tienen como sociedad.

Ojalá se instale en la sociedad un sentimiento que rechace el clima de polarización y violencia política que algunos promueven, que sabemos nada bueno traen para nuestra sociedad y como país nos esmeremos en construir un futuro democrático mejor que demuestre que aprendimos las lecciones de la historia.

Sin memoria no se puede construir un mejor futuro; pero ese futuro debe construirse asumiendo los desafíos actuales como es el progreso económico y

social que anhela la mayoría del país, junto a una democracia que respete los derechos humanos.

PARA RECONOCER EL ACCESO A INTERNET COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Senadora XIMENA ORDENES

Este proyecto de ley ha tenido un largo trámite legislativo.

En la Comisión de Transporte hemos acordado un paquete de artículos que sugerimos aprobar y otros para rechazar en esta Sala para que podamos constituir una Comisión Mixta que nos permita resolver esas diferencias que hemos detectado consensualmente en la Comisión.

Esta norma es muy importante porque reconoce acceso a Internet como un servicio público lo que ayudará a la democratización del país y también a mayor productividad laboral; por eso debemos legislar y resolver adecuadamente las diferencias con la Cámara de Diputados.

Pero también debemos resolver las brechas o problemas que permitan que este acceso a Internet sea para todas y todos, para todo el país y no sólo en la RM.

Por eso he pedido al gobierno a que en paralelo a despachar este proyecto en la Comisión Mixta, esté sea acompañado por un Protocolo que asegure la implementación de algunas medidas complementarias para hacer real esta mayor equidad en el país en materia de conectividad digital.

Es urgente que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones implemente un programa trianual para resolver el acceso a la fibra óptica de 2,2 millones de hogares, que significan 5,6 millones de personas sin acceso a la conectividad digital según datos de la Comisión Nacional de Productividad. Ojalá en el presupuesto 2024 avancemos en esta materia de equidad digital.

También se requiere reactivar la tramitación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones como entidad reguladora independiente, donde exista una dirección superior vía Consejo Colegiado con representantes tanto del Ejecutivo como Legislativo, con experiencia regulatoria y en el sector de las telecomunicaciones.

No puede continuar esta anomalía actual, donde la Subsecretaría de Telecomunicaciones concentra tanto la

función de generar e implementar políticas públicas como ser órgano fiscalizador.

También se requiere resolver "los cuellos de botella" en materia de plazos de tramitación de los permisos de instalación de torres y antenas, como también los extensos plazos de tramitación de las concesiones.

En estos ámbitos se requiere avanzar en paralelo a la aprobación de este proyecto de ley que declara a Internet como servicio público, para que el conjunto de la sociedad -no solo algunos- puedan acceder a estas herramientas tecnológicas claves en el siglo XXI.

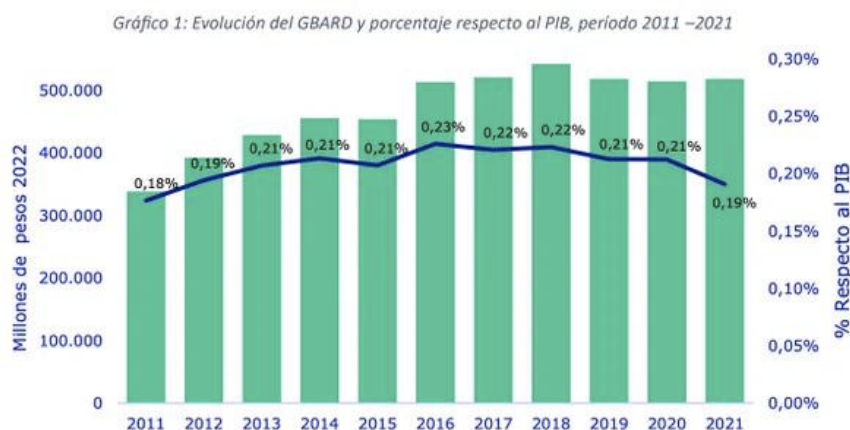
Por eso, pedimos a MTT que en la Comisión Mixta se acuerde un Protocolo con estas medidas a lo menos para que avancemos en concretar en aumentar la conectividad digital.

Respaldo lo propuesto por Comisión de Transporte del Senado ii

LA EJECUCIÓN EN MINISTERIO DE CIENCIAS

La inversión pública en Ciencias, Innovación y Tecnología es baja.

En 2021 llegó a 0,19% del PIB



El desafío del nuevo gobierno es incrementar la inversión pública en Ciencias e Innovación productiva que impulse nuevas industrias y mejorar su ejecución para mantener una senda de incremento permanente de inversión en este pilar de una nueva estrategia de crecimiento económico para la década.

Pero a julio 2023 se observa una preocupante lentitud en la ejecución del gasto del Ministerio de Ciencias e Innovación.

En las transferencias Corrientes lleva un 49% de ejecución de los \$467.242 millones (explicado por los buenos resultados de ANID), pero en las transferencias de capital que son \$18.886 millones no ha ejecutado nada (0% de ejecución).

Otro ejemplo, en presupuesto 2022 se creó programa Capacidades Tecnológicas (producto de la presión de la Oposición de la época en el Parlamento) y solo se ejecutó 85% de lo asignado y para este año -Presupuesto 2023- tuvo una rebaja de recursos y lleva una baja ejecución, tanto en Transferencias Corrientes de \$43.718 millones y lleva ejecutado a julio

sólo \$1.446 millones que equivale a 3% y en transferencias de capital de los \$1.681 millones no ha ejecutado nada al mes de julio.

Los beneficiarios de este nuevo programa presupuestario son las instituciones de educación superior públicas y privadas, lo que es una mala señal en la perspectiva de tener nuevas universidades aportando a la innovación productiva y ciencia aplicada.

Probablemente esta lenta ejecución abrirá un debate sobre su impacto en presupuesto 2024; pero existe coincidencia de que el país necesita invertir más en Ciencias aplicada, Innovación productiva y Tecnología y sería bueno saber cuál es el problema que explica esta lenta ejecución (¿es falta de proyectos pertinentes? ¿falta de diálogo con mundo productivo o lentitud burocrática del Ministerio?).

SOBRE LA EJECUCIÓN A JULIO 2023.-

ii)En el programa FICT (Fondo Innovación, Ciencia y Tecnología) lleva una preocupante lentitud en la ejecución

Transferencias corrientes	\$174.388 millones	\$23.514 millones	13,4% ejecución
Transferencias de Capital	\$ 1.681 millones	\$ 0	0% ejecución

iii) En la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Ex Conicyt) la ejecución de las transferencias corrientes va avanzada, contrastando con resto de programas del Ministerio

Transferencias Corrientes	\$379.434 millones	\$216.635 millones	56% ejecución
Transferencias de Capital	\$ 17.205 millones	\$ 0	0% ejecución

iv) En el programa MILENIO/Iniciativas Científicas que son transferencias corrientes hay un poco de retraso

Transferencias Corrientes \$20.713 millones \$ 7.427 millones 35% ejecución

v) En la Subsecretaría de Ciencias la ejecución de las transferencias van lentas -30,5% de los \$13.449 millones solo se han ejecutado \$4.108 millones-, especialmente a las entidades del Gobierno central.

Al mes de julio NO han recibido las transferencias desde el Ministerio las siguientes instituciones: CCHEN, SERNAGEOMIN, ISP, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y otras. Sería bueno conocer los motivos de este retraso.

A otras entidades públicas el programa EXPLORA lleva una buena ejecución -43,9%- de los \$9.104 millones asignados en este presupuesto 2023.

SOBRE PRESUPUESTO 2024.-

En función del debate presupuesto 2024 y considerando que existe importantes consensos en mundo político de que la inversión en innovación productiva y tecnologías puede ser una palanca importante para impulsar un ciclo de crecimiento de la economía con otros motores de desarrollo productivo es clave que Ministerio de Ciencias resuelva sus problemas de ejecución del gasto que nuevamente presenta este 2023.

Es clave que presente una agenda de trabajo que acelere su ejecución para 2024

Se requiere invertir más en Ciencia aplicada, en proyectos que abran espacio a nuevos desarrollos productivos; que además, estimulen mayor inversión empresarial y esa conversación debe “abrirse” con la Ministra actual, incluso aconsejando la creación de un Consejo que oriente mejor la inversión donde participen Empresas, expertos y el Ministerio que trimestralmente informe a la 4ª Subcomisión de Presupuestos.

EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL SIGUE ATRASADO, SUBSISTE LA INEQUIDAD TERRITORIAL, REITERÓ SENADORA XIMENA ORDENES

En la última sesión de la Comisión de Transporte, la directora del Transporte Público Metropolitano Paola Tapia expuso las características principales de la nueva licitación en la red metropolitana de transporte público que renovará licitación en 30% del sistema, lo que significará 2.000 nuevos buses eléctricos y otros avances tecnológicos para sus usuarios.

Como reacción a la exposición, la senadora Ximena Ordenes reiteró su preocupación de que sigue la modernización del transporte público en Santiago y en regiones sigue el atraso, no hay nuevas noticias que aseguren un plan de modernización del transporte público, añadió la senadora que hace meses “el proyecto de ley que renueva el subsidio al transporte regional “está congelado”, presentamos diversas indicaciones -respaldadas transversalmente- para asegurar que el 50% del subsidio se destinará a financiar exclusivamente proyectos que modernicen el transporte público mayor y menor en las diversas regiones, que se cree en ellas directorios para el fomento y coordinación del transporte público en regiones y no hay ninguna señal de tramitación de estas indicaciones de parte del Ejecutivo”.

La senadora Ximena Ordenes reiteró que “estos contrastes de avances en la Región Metropolitana y nulos avances y atrasos para el transporte público en regiones muestra una inequidad territorial que no puede seguir”; además, señaló su preocupación de que en proyecto de ley del gobierno denominado “Regiones más fuertes” “se pretende eliminar este subsidio espejo para el desarrollo del transporte público regional. Eso es una mala noticia para las regiones, porque no puede continuar esta inequidad ni menos pretender eliminar el espejo que consagró la ley en 2009 que 1 peso de subsidio para Transantiago era también 1 peso para las regiones”.

Finalmente, Ximena Ordenes solicitó que en la próxima sesión de la Comisión de Transporte del Senado del 27 de septiembre fueran citados los Ministros de Transporte y de Hacienda para conocer cuál es “la voluntad política del gobierno de legislar en renovar el subsidio al transporte público regional y que este se destine mayormente a financiar los planes de modernización para las regiones”.

Esta solicitud fue respaldada por el resto de los senadores de la Comisión y ya fue citada para “Analizar la situación de los subsidios al transporte público de las regiones”.

A este punto han sido invitados el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz y el Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, reza la citación de la Comisión de Transporte del Senado.

LAS DIFICULTADES DEL SECTOR DIGITAL

Informe CNP

Problemas a resolver en Protocolo.-

Panorama del sector

- Hoy 2,2 millones de viviendas no tienen acceso a fibra óptica, aproximadamente (5,6 millones de personas).
- Las interrupciones de internet en Chile son frecuentes y costosas.
- Se registran en promedio 182.469 cortes masivos al año.
- Se estima que, si los cortes en 2021 hubiesen afectado al 10% de los hogares y empresas, habrían implicado un costo de CLP 114 mil millones (0,1% del PIB).
- Se desconoce en tiempo real el estado de la red.

Problema : Extensos plazos de tramitación de instalación de torres

- Entre 2012 a 2021, el plazo de tramitación de los permisos de instalación de torres promedió 154 días corridos. Excluyendo casos extremos, el plazo promedio fue de 128 días corridos.
- Estos plazos son extensos en relación con los tiempos máximos que ha establecido la SUBTEL en las bases de concursos efectuados desde 2012 (generalmente 365 días corridos).
- Este porcentaje es considerable, en tanto otros trámites o autorizaciones sectoriales deben ser tramitados de manera previa a la instalación de una torre soporte.
- Ejemplo: contratos de compraventa o arrendamiento en caso de instalación en un terreno privado o permisos de uso en caso de instalación en terrenos administrados por MBN o municipalidades.
- Direcciones de Obras Municipales: dentro de las causas de los extensos plazos se encuentra la oposición ciudadana.
- Delanálisis de 75 recursos de protección interpuestos contrato rresdesdeel inicio de la "Ley de Antenas", las categorías señaladas como más vulneradas:
- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (85%).
- Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica(80%).
- Es decir, se asocian a la emisión de ondas electromagnéticas. Aun cuando la evidencia indica que ante los niveles actuales, no habrían riesgos en la salud.

SOBRE REGISTRO DE DEUDA CONSOLIDADA

SENADORA XIMENA ORDENES

En un país donde los ingresos del trabajo son bajos o han caído en los últimos años para los sectores medios y populares como lo muestra la CASEN 2022; es necesario tener un mercado financiero que facilite el acceso a un sistema de créditos, pero debe ser un acceso justo donde no se normalicen los abusos y opacidades que durante mucho tiempo se repitieron mucho en la sociedad chilena.

Cuando tenemos un 80% de los chilenos/as recibiendo ingresos del trabajo hasta \$1,0 millón mensual, entonces acceder al sistema de crédito es la posibilidad de acceder a mejores servicios y posibilidades de desarrollo familiar y social.

Por tanto, cualquier iniciativa que apunte a tener tasas de créditos más bajas que las actuales son avances mínimos en una sociedad que tiene demasiadas inequidades.

Esta iniciativa legal que crea un Registro Público de información positiva y negativa de carácter público en la CMF y gratuito contribuirá a tener un sistema con tasas más bajas y menos abusiva con los consumidores.

Un Registro de Deuda Consolidada es una iniciativa que ayudará a mayor inclusión financiera y crediticia y esperamos que esta Sala del Senado lo apruebe

Me preocupa escuchar voces que cuestionan la idea de tener un Registro Público con información que permita tener tasas más bajas y eso es especialmente importante ahora cuando también va bajando la Tasa de Política Monetaria del banco Central

Viene una recuperación económica que también debiera ayudar a las familias de clase media y eso este proyecto lo busca y por eso lo apoyamos ahora en general ii

LOS DESAFÍOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2024

Próximo año es un año electoral decisivo.-

Hoy hay un fuerte sentimiento crítico de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno; especialmente en materia de seguridad, sobre la corrupción ocurrida en GORES y MINVU Antofagasta, hay preocupación por una economía estancada (este año la economía caerá -0,5%) y sigue aumentando el desempleo con preocupante crecimiento del empleo informal.

En encuesta conocida hoy (TU INFLUYES) la aprobación a gestión Presidente Boric llega a 26% y la desaprobación llega a 55%.

El Presupuesto 2024 debe entonces considerar este escenario social y debiera privilegiar el desarrollo de una estrategia de implementación que asegure que el presupuesto fiscal se traduzca en beneficios sociales y mejores condiciones de vida.

El desafío está en la gestión.

Por tanto, la lentitud en implementar las ayudas en casos de catástrofe o los altos niveles de miedo y temor que tienen las familias ante el crimen organizado en muchas comunas populares y de clase media son cuestiones críticas para el gobierno.

Los desafíos del Presupuesto Fiscal 2024

- i) **En este contexto el Presupuesto no puede ser austero - como se señaló en Chile Day- al contrario, tiene que ser un Presupuesto Reactivador, con incremento de la inversión pública y así además generar nuevos empleos formales.**

Un elemento clave es incrementar la inversión pública.

Una innovación del presupuesto 2024 que propongo es lograr un mejor uso del Fondo Espejo que es el subsidio al transporte público en regiones para que se **oriente a financiar un real plan de modernización del transporte público mayor y menor en las regiones, que incorpore más ciudades a los sistemas**

regulados y que el transporte público menor vaya migrando a la electromovilidad.

Este plan debe ser 2024-2026 y debe garantizarse que a lo menos el 50% del espejo en regiones financie acciones que mejoren el transporte público regional, como lo hemos planteado insistentemente en la Comisión de Transporte del Senado.

Esta petición es bastante transversal.

Por otras parte, es un tremendo error la señal de Hacienda de querer eliminar el Espejo/FAR para el transporte público regional como se ha planteado en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Regiones Más Fuertes.

Hoy por unanimidad la Comisión de Transporte del Senado después de debatir con Ministro de Transporte y directora DIPRES acordó reiterarle al gobierno **que es urgente desarrollar un Plan de Modernización del Transporte Público regional, que el instrumento debe ser la renovación del subsidio al transporte público garantizando que este se invierte planes de modernización y no en otras iniciativas regionales.** Por tanto, la idea de eliminar el Espejo que implica que \$1,0 para Transantiago significa \$1,0 para el desarrollo del transporte público regional NO tiene apoyo político en el Senado.

Reiteramos petición de que en Presupuesto 2024 venga el Espejo/FAR para desarrollar y modernizar el transporte público regional.

ii) Este presupuesto 2024 debe resolver las vulnerabilidades y las prácticas corruptas que se han detectado este año en GOREs y en MINVU Antofagasta.

Al respecto hay un relativo acuerdo transversal de que la ley de Presupuesto 2024 debiera reformar un conjunto de glosas el articulado general de la ley y en las Glosas de los GOREs, al respecto quisiera insistir:

- En fortalecer los controles externos a los GORES vía un programa gradual de fortalecimiento de las Contralorías Regionales, en los presupuestos 2024 -2026.
- Modificar la ley orgánica sobre Administración y Gobierno Regional y en una glosa de esta ley de presupuesto 2024 para que los proyectos de inversión de montos superiores a 1.000 UTM requieran la aprobación del Consejo Regional para el caso de las instituciones públicas y que toda asignación a privados debe pasar por aprobación de los CORES.
- Modificar el actual artículo 23 de la ley de presupuesto y ampliar la concursabilidad, la transparencia y las rendiciones cuentas tanto a las transferencias corrientes como también a las transferencias de capital.
- Que las asignaciones directas se identifiquen en la ley de presupuesto y glosas respectivas, por tanto deben votarse transparentemente por el Parlamento
- Establecer que las instituciones privadas y ejecutoras de fondos públicos deben tener a lo menos 3 años de expertise institucional en el área.

iii) El presupuesto 2024 debe tener un importante incremento del presupuesto del Ministerio de Salud con foco en disminuir las listas de espera en los Servicios de Salud y del MINEDUC para que financie un potente Plan de Reactivación Educativa que se enfoque en remediar los deterioros de aprendizaje que mostró el SIMCE 2022 y en disminuir los niveles de violencia en la convivencia escolar.

La sociedad espera que los problemas sociales deben empezar a enfrentarse especialmente en educación y salud, buscando enfocarse en resolver los actuales problemas señalados..

TIPS PARA SESIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL

En off me dicen q Dipres va ir a sesión hoy a insistir q gbno quiere invertir más recursos en transporte público regional ,pero serían ambiguos sobre Espejo y FAR

Les he insistido en q tienen q reactivar tramitación del proyecto de subsidio (MTT me dice q recién enviaron indicaciones a segpres/Dipres) y q en presupuesto 2024 mantengan espejo/FAR con un % (50%) de esos recursos a transporte público regional

Pero no están claro aún

Sería bueno pedir información sobre en q gasta en q proyectos se usan los recursos del espejo q administra directamente MTT

: Ya sabemos q los gbnos regionales no hay información y es ahí donde queremos marcar q 50% vaya a Transporte público menor y mayor en las regiones

: Esa lámina debiera informarse con la ejecución presupuestaria ya q ahí no sabemos si hay atrasos
Solo sabemos de atrasos en pago a las barcazas

A propósito de la dipres .-

Por eso en las indicaciones proponemos eliminar el concepto "desarrollo regionales y el FAR solo se dedique a financiar obras de transporte público regional

[Con la fórmula d DIPRES se va diluir el Espejo de \$1 para RM y subsidio a transantiago significa \$1 para transporte público regional

La pregunta es porq NO SE CREA UN FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE PUBLICO REGIONAL CONVIRTIENDO AL FAR EN ESE INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO REGIONAL

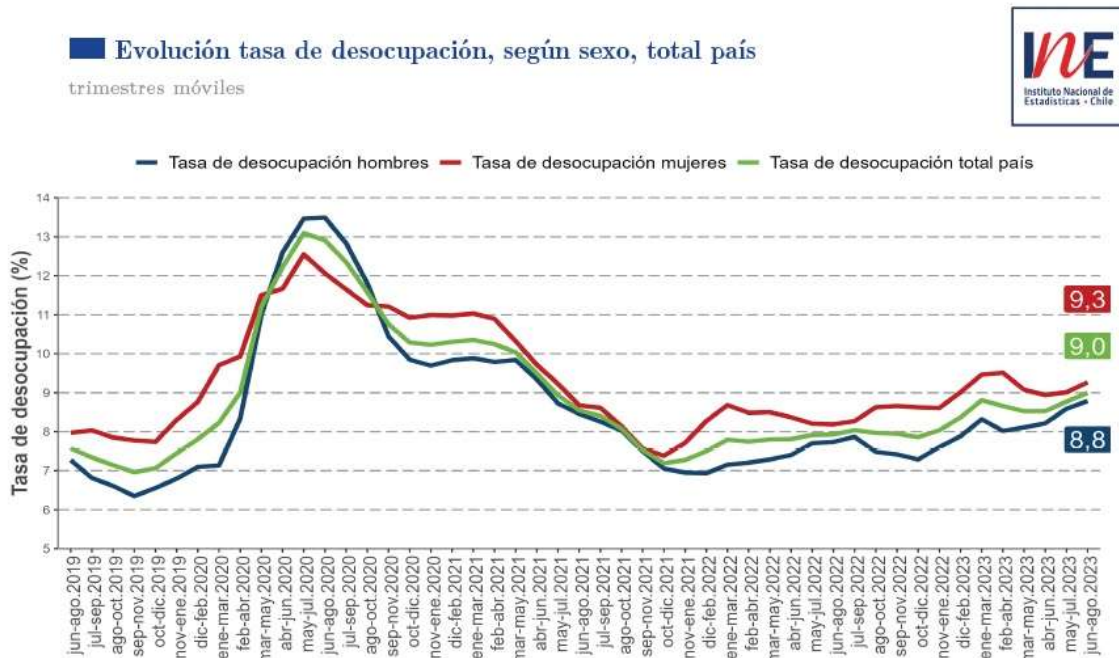
: Es claro q DIPRES no ha leído ni evaluado lo q se ha estado discutiendo en proyecto q renueva el subsidio al transporte público regional q está debatiendo esta Comisión

Esos cambios en proyecto regional debieran estar en proyecto q renueva el subsidio al transporte público regional

Este fondo para transporte público regional debiera estar en proyecto q renueva subsidio y no en proyecto de regiones más fuertes q NO verá esta comisión de Transporte
El proyecto ya pasó por la Cámara y ahora está en Senado

y se quiere volver al inicio y no hacer economía legislativa como sería aprobar esos cambios en el Subsidio al transporte público regional

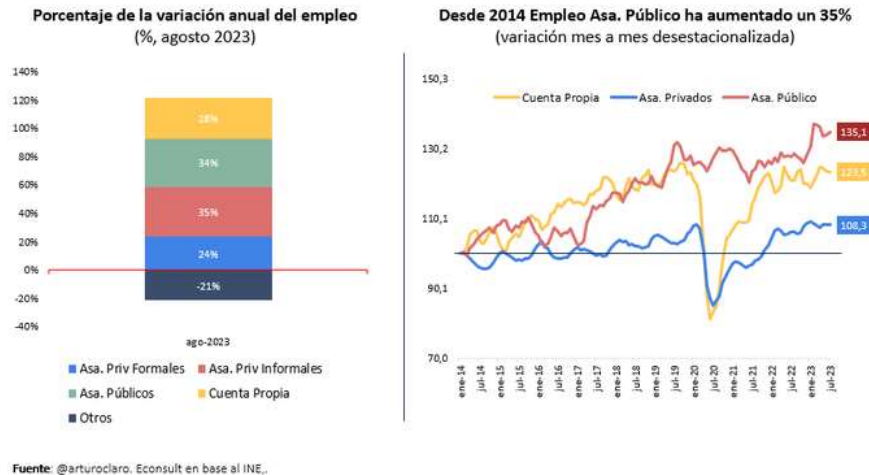
ENCUESTA EMPLEO/INE



La estimación del total de personas ocupadas creció 1,7%.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comercio (4,1%), actividades de salud (9,9%) y administración pública (12,0%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (7,0%).

LA INFORMALIDAD ES LO Q MÁS CRECE EN LOS OCUPADOS. AUMENTA PRECARIEDAD LABORAL



Empleo asalariado formal explica solo el 24% de la recuperación anual. Grueso es explicado por empleo público y cuenta propia. Desde 2014 se observa q empleo asalariado público ha aumentado un 35,1%, el empleo por cuenta propio un 23,5% y el asalariado privado solo un 8,3%

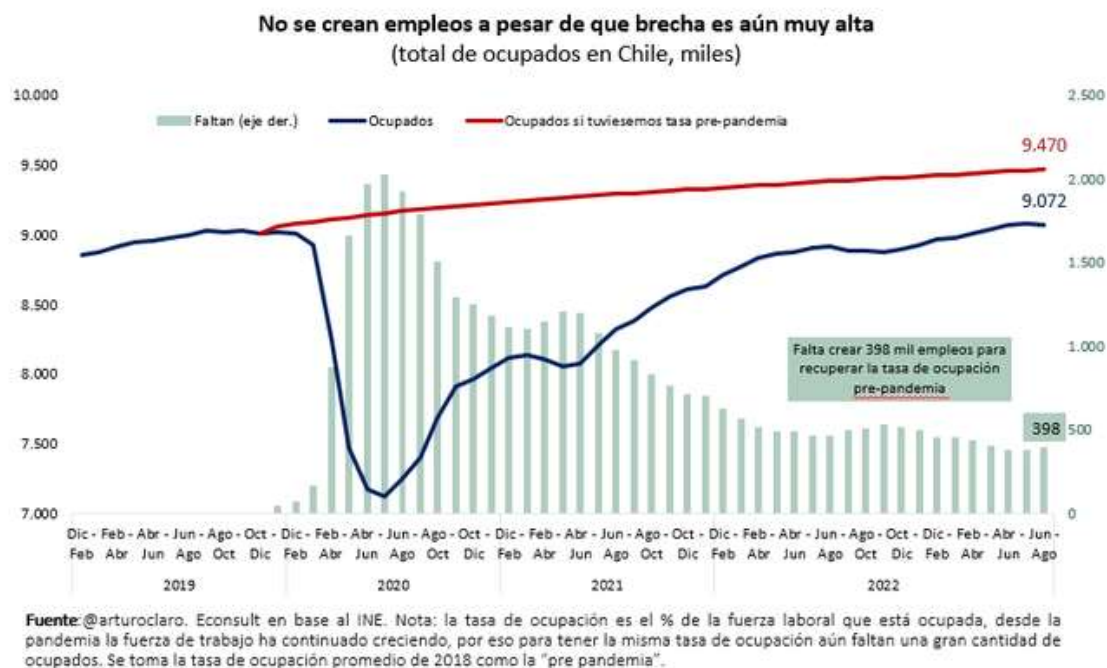
Creación de empleo y fuerza de trabajo: se acentúa la destrucción de empleo

(miles, diferencia respecto al trimestre móvil anterior)



Claramente el empleo privado ha estado cayendo desde abril 2023, pero aún se está lejos del nivel pre pandemia

Caída de empleo formal sería producto del estancamiento económico vivido en 2023; por ello, es clave que en 2024 exista un presupuesto reactivador con foco en generación de empleos.



Esto se da en un contexto donde aún falta por recuperar cerca de 390 mil trabajos para volver a tener un mercado laboral como el de prepandemia. Así, en vez de cerrarse la brecha en esta ocasión aumentó -> disminuye la masa salarial -> menos impulso al consumo y el comercio.